



PERSONA QUEJOSA: *****

***** (2).

MATERIA: ADMINISTRATIVA.

MAGISTRADO PONENTE:
MARIO GALINDO ARIZMENDI.

SECRETARIO:
LIC. KEVIN HERNÁNDEZ CONDE.

Mazatlán, Sinaloa, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, correspondiente a la sesión virtual del día **veinticinco de junio de dos mil veintiséis.**

V I S T O S para resolver, los autos del juicio de
amparo directo administrativo 203/2025.

RESULTANDO:

I. Demanda de amparo. *****

*******(2)**, por propio derecho, mediante escrito

presentado el **diez de octubre de dos mil veinticuatro**, en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, promovió juicio de amparo directo contra el acto de dicha Sala, consistente en la sentencia de **once de julio de dos mil veinticuatro**, dictada en el **recurso de revisión 1652/2023** y su acumulado **1653/2023**.



IV. Turno. En proveído de **veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco**, se turnó el asunto al

Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, que continúan vigentes en términos del décimo noveno¹ transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado se acredita, de conformidad con el artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo, con el

1 **“Décimo Noveno.-** Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos.”



² Foja 63 del expediente del recurso de revisión.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 108/2009³, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

³ Registro digital: 166687. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2009. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Agosto de 2009, página 154. Tipo: Jurisprudencia.

Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:30 y las 15:00 horas.

Los Magistrados podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando a los interesados. Si una diligencia se inició en días y horas hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.

Incluso, debe decirse que en la página oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se advierte que se recibirán las promociones en las Oficinas de Partes de la sala respectiva, en el horario comprendido de las ocho horas con treinta minutos a las dieciséis horas con treinta minutos.

Lo anterior, también se invoca como hecho notorio, pues debe tomarse en consideración que tal información se encuentra en una página de Internet [[Oficialía de Partes - TJA SINALOA](#)] oficial que corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y es accesible para ulteriores consultas.



El Pleno podrá habilitar días y horas que las necesidades del servicio lo requieran.

Por ello, con tal información se permite corroborar que la primera hora hábil comprende de las ocho horas con treinta minutos a las nueve horas con treinta minutos.

CUARTO. Legitimación. *****

QUINTO. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Conforme al numeral 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, corresponde el carácter de tercero interesado al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por ser la contraparte de la parte quejosa en el juicio fuente del acto reclamado; parte oportunamente llamada a juicio.

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a6520635a6633000000000000000000ae05
01/12/28 12:16:53

“ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a6620636a6633000000000000000000ae05
01/12/28 12:16:53

En efecto, los sujetos beneficiados con la suplencia de la deficiencia de la queja de ambos tipos de relaciones —laborales o administrativas— continúan en la posición desfavorecida que originó el deber del juzgador de amparo de auxiliarlos cuando de oficio advierta que sufrieron una violación a sus derechos humanos o a las garantías para su defensa, pues lo único que ocurre es que en lugar de enfrentar un desequilibrio procesal en los juicios entablados con motivo de un trabajo remunerado, ahora lo sufren respecto de los beneficios de seguridad social que las leyes les confieren cuando aspiran a percibir una pensión, lo cual los coloca en una situación igual o de menor posibilidad de defensa, pues es un hecho notorio que en estos casos la pretensión que se exige por vía judicial prácticamente se limita a lo suficiente para poder subsistir durante la jubilación, el desempleo por cesantía en la vejez, la invalidez e incluso la orfandad o viudez de los beneficiarios del pensionista, lo cual por lógica consecuencia, también les impide hacer erogaciones para contratar los servicios legales profesionales que correspondan.

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a6620636a6633000000000000000000ae05
01/12/28 12:16:53

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a662063a6633000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

be seña
[aquí q
de Pens
lución c
eintiuno
es de la

א
כ
פ

⁶ Registro digital: 2007681. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: 2a. XCV/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1106. Tipo: Aislada.

Ahora, esta Juzgadora estima **fundados** los conceptos de nulidad planteados por la actora en razón de las consideraciones que enseguida se exponen:

$$\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right)$$

1-Original del oficio ***** (1), signado
a autoridad demandada.

3- Constancia de antigüedad. Copia simple de la constancia de uno de febrero de dos mil diez, signada por el **Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo**, relativa al expediente (***** (1)).

De la constancia de antigüedad señalada, se extrae que el empleador del actor, el **Gobierno del Estado de Sinaloa**, por conducto del **Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa**, el uno de febrero de dos mil diez, hizo del conocimiento del **Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa**, que se le reconocía, al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, una antigüedad de cuatro años, once meses y veintinueve días; lo anterior, con fundamento a lo previsto por el artículo trigésimo primero transitorio de la Ley del Pensiones del Estado de Sinaloa.

En ese orden de ideas, al haberse transgredido en perjuicio del ahora demandante, las disposiciones legales aplicables en la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se actualiza la causa de nulidad prevista por el artículo 97, fracción IV de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por lo que resulta procedente **declarar la nulidad** del oficio impugnado, de conformidad con el numeral 95, fracción III de la ley en comento.

Cuarto. Condena. Ahora bien, al tomar en cuenta que el acto impugnado se trata de la negativa de la autoridad demandada en la realización de las obligaciones que le impone la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa; en esa virtud, esta Juzgadora determina que la nulidad decretada debe ser para efecto de que, el **Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa**, efectúe la entrega al actor de la cuenta individual, la cual contiene el bono de pensión, cuotas y aportaciones, de conformidad con el artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, además de que, con fundamento en los artículos 65 y 66, fracción I, de la citada Ley, al ser el **Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa** el instrumento básico para cumplir con las disposiciones de la ley de pensiones referida, y al tener como atribución, el satisfacer las prestaciones contempladas en la misma, éste debe de hacer todos los trámites que estime convenientes para realizar el pago a la parte actora del saldo de su cuenta individual.

$$(\dots)$$

I. La parte actora acreditó parcialmente su pretensión, en consecuencia:

II. Se declara la nulidad del acto impugnado atribuido al Director General del Instituto De Pensiones del Estado de Sinaloa, según lo analizado en el considerando TERCERO.

III. Se condena al Director General del Instituto De Pensiones del Estado de Sinaloa, en los términos precisados en el considerando CUARTO.

IV. Esta sentencia no es definitiva, ya que en su contra procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 112, fracción V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

À juicio de esta Ad quem le asiste la razón a la autoridad recurrente pues la actora no acreditó en el juicio principal, haber migrado al sistema de cuentas individuales de manera voluntaria y en consecuencia, que le asista el derecho de pago del bono de pensión solicitado.

Al respecto, (sic) Sala Superior considera errónea la conclusión y apreciación de la Magistrada de Primera Instancia, pues del escrito inicial de demanda, se desprende que la actora manifestó que al entrar en vigor la Ley de Pensiones, fungía como servidor público del Gobierno Estado de Sinaloa, por lo que, en un principio, fue considerada como trabajadora en transición, sin embargo, "por convenir a sus intereses comunicó por escrito su voluntad de migrar al sistema de cuentas individuales", por tanto, este órgano de alzada advierte que adquirió la carga de acreditar su pretensión, lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria a la materia, por disposición expresa del arábigo 33 de la Ley de Justicia, tal y como lo afirma la autoridad, sin embargo, tal circunstancia no aconteció.

Lo anterior, atendiendo a que la actora afirmó que migró al sistema de cuentas individuales, lo cual quedaba acreditado mediante la constancia (***** (1)) de fecha uno de febrero de dos mil diez, mediante el cual el Director de Recursos Humanos comunicó al Director General del IPES, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo trigésimo primero transitorio de la Ley de Pensiones, le reconocía una antigüedad de 04 años 11 meses y 29 días como años de cotización al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, no obstante que la actora ofreció la constancia en mención para demostrar que el trabajador fallecido había migrado al sistema de cuentas individuales, es necesario destacar que de la constancia en cuestión no se advierte fehacientemente tal circunstancia, pues aún y cuando el Director de Recursos Humanos precisó que su emisión la realizó en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Trigésimo Primero Transitorio de la Ley de Pensiones, precepto que si bien, se encuentra en el capítulo que regula a los trabajadores en transición que migraron al régimen de

*Precisado lo anterior, resulta indudable para esta Segunda Instancia que en el caso que nos ocupa, la constancia de fecha uno de febrero de dos mil diez, del expediente ***** (1), emitida por el Director de Recursos Humanos de Gobierno del Estado, a través de la cual informó al Instituto demandado el reconocimiento que el empleador hizo respecto a la antigüedad del trabajador ******

Pues bien, no obstante que a través de la comentada constancia se reconoce a la actora los años de cotización, se tiene que no le es útil en el caso para demostrar lo que con ella pretendía, y que como antes se dijo era acreditar que migró al sistema de cuentas individuales previsto por la Ley de Pensiones, es decir, no acreditó con ella esa afirmación manifestada en los hechos de su demanda.

"ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DOCUMENTO DENOMINADO "TRANSACCIÓN DE DOCUMENTO DE ELECCIÓN" ES INEFICAZ PARA DEMOSTRAR QUE SE OPTÓ POR EL BONO DE PENSIÓN EN CUENTA INDIVIDUAL".

Lo anterior, atendiendo a que la referida tesis de jurisprudencia, derivó de la interpretación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual en semejanza a la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, regula la figura del régimen pensionario de los trabajadores al servicio del Estado, y específicamente en sus arábigos quinto y séptimo transitorios, dispone que a partir del día uno de

Por otra parte, no pasa desapercibido para Sala Superior, el contenido de los demás argumentos expuestos por la autoridad en el recurso 1652/2023, así como por la actora en el diverso 1653/2023, sin embargo en estima de este órgano de alzada, resulta innecesario su estudio ya que a nada práctico conduciría pues cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el alcance y sentido de esta resolución, máxime que del análisis realizado a los argumentos expuestos por la multicitada actora, se aprecia que van encaminados a controvertir la cuantificación del bono de pensión, el cual como ya se dijo, es un derecho exclusivo de los trabajadores que pertenecen al régimen de cuentas individuales.

SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 96 de la Ley de Justicia, se fijan de forma clara y precisa el acto impugnado y la pretensión procesal de la parte actora; por lo que, de la lectura de la demanda se advierte que reclama del Director General del IPES, la negativa de pago de los recursos relativos al bono de pensión, cuotas del trabajador y aportaciones del empleador, que forman parte de su cuenta individual, contenida en el oficio ***** (1), señalando como tercero interesado al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.

La pretensión procesal del enjuiciante esencialmente consiste en que este órgano jurisdiccional se pronuncie declarando la nulidad del acto antes precisado y se condene a la autoridad demandada al pago de las cantidades que corresponda por los referidos conceptos.

SÉXTO. ESTUDIO DE FONDO. Este órgano jurisdiccional procederá al estudio de manera conjunta de los conceptos de nulidad y los hechos constitutivos de la demanda esgrimidos por el actor al considerarse como un todo, y al advertirse de ellos la causa de pedir del accionante, argumentos mediante los cuales reclama la nulidad de la negativa de pago de los recursos

En ese sentido, y si como antes se indicó, al existir controversia entre lo señalado por la parte actora y lo argumentado por la autoridad demandada en relación al derecho de las prestaciones que solicita, tal y como lo es, el pago del saldo de su cuenta individual, la cual incluye las cuotas del trabajador, las aportaciones del empleador y el bono de pensión, es preciso traer a colación las siguientes disposiciones:

Así también, del transitorio trigésimo segundo se advierte que los trabajadores cuentan con un plazo de tres meses, a partir de la fecha de constitución material del Instituto, para comunicar por escrito a dicho ente público y al empleador la opción elegida; en el entendido de que los trabajadores a que alude dicho precepto, son los que se encuentran en transición, en virtud de que el numeral en comento, señala que en el supuesto de que el trabajador no se manifieste en uno u otro sentido, se entenderá que no migró al sistema de pensiones en cuentas individuales y

4. Acta de nacimiento, de la cual se advierte que, a la fecha de la presentación de la solicitud, contaba con 69 años, 04 meses de edad.

Es entonces que, del análisis integral de las probanzas referidas no se advierte que la actora lograra acreditar lo argumentado en los hechos constitutivos de su demanda, es decir, que migró de régimen, puesto que de dichas documentales no acredita la manifestación expresa de su parte relativa a que hubiese sido su voluntad migrar al sistema de cuentas individuales, y que dicho escrito se haya presentado ante el IPES y el empleador, dentro de los tres meses siguientes a la constitución material del Instituto, ello de conformidad al artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la Ley de Pensiones aludida.

Aunado a que, considerando que de la valorada constancia de servicio signada por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, correspondiente al actor ***** (1), se advierte que se encontraba activa al servicio de Gobierno del Estado a la fecha en que entró en vigor la Ley de Pensiones, entonces, es incuestionable que es considerada trabajadora en transición, ello, conforme a lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de dicha Ley de Pensiones; en esa tesitura, **debíó expresar por escrito su voluntad de migrar al nuevo régimen de cuentas individuales, para tener derecho al pago del bono de pensión**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo Vigésimo Noveno en relación con el Trigésimo Segundo Transitorios de la misma ley estatal, sin embargo, no acreditó haber migrado al régimen de cuentas individuales, en virtud de que no aportó el escrito o documento en el que conste fehacientemente su voluntad de migrar a dicho régimen, lo cual como antes se precisó constituía su obligación, dada la afirmación que en ese sentido realizó en diversas ocasiones en su demanda.

Ahora, si bien los formatos de los avisos de afiliación son aprobados por el Instituto demandado y su presentación ante el mismo, como lo adujo la actora en su demanda, es imputable al empleador, no pasa desapercibido que también conforme a lo dispuesto por el numeral 8° de la Ley de Pensiones, el trabajador recibe una copia de dicho aviso, y no obstante que en el

Así las cosas, de acuerdo al decreto descrito con anterioridad, el IPES se constituyó materialmente el día primero de julio de dos mil nueve, fecha en que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el aviso descrito en el párrafo que antecede, documento que, al ser de carácter público, puede ser consultado por los interesados en el portal del periódico oficial de referencia, o en su caso, solicitar copias certificadas del mismo para su consulta, por lo que, si tomamos en cuenta la fecha antes señalada, la demandante tenía hasta el primero de octubre del mismo año, para informar al Instituto y a su empleador si era su voluntad permanecer en el régimen de transición o bien, migrar al sistema de cuentas individuales, lo cual no aconteció en el caso de estudio, por lo que, al no haber manifestado en uno u otro sentido, se entiende que no manifestó su voluntad de migrar al nuevo régimen de cuentas individuales, para tener derecho al pago del bono de pensión, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el supracitado Artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la Ley de Pensiones.

En la anotada tesitura, es procedente reconocer la validez de la negativa contenida en el oficio ***** (1), de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, lo anterior, de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 95 de la invocada ley que rige a este órgano jurisdiccional.

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a662063a6633000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

Lo anterior, toda vez que los agravios no están encaminados a combatir los razonamientos sustentados por Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en los que determinó que el oficio emitido por el Director de Recursos Humanos con fundamento en los artículos Trigésimo Primero, Vigésimo Noveno y Trigésimo transitorios de la Ley de Pensiones, es suficiente para acreditar la migración del quejoso a cuentas individuales con derecho al bono de pensión.

Son infundados los agravios antes señalados.

que la
n elegida
alguna,
sitorio.

- as alleg
a de cue

stima qu
udio, pu
persona

Por tanto, se estima correcto que la sala responsable emitiera pronunciamiento de fondo respecto de los mismos,

Es infundado lo expuesto anteriormente.

En la sentencia que fue sujeta a revisión, el juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto por vulnerar el principio de seguridad jurídica; y, en contra de dicha sentencia, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión que dio origen al referido amparo en revisión 305/2015.

Lo anterior evidencia, que contrario al dicho de la persona quejosa, este tribunal colegiado no fue quien emprendió el estudio de constitucionalidad de dicho precepto transitorio, ni determinó correcta la determinación

Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J 144/2006, visible en la página 351, octubre 2006, tomo XXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 174094, cuyo rubro y texto dicen:

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a662063a6633000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

Por tanto, al establecer un plazo prudente para elegir el sistema al que deseaba pertenecer se evitó crear un estado de incertidumbre de los trabajadores y la actuación arbitraria o caprichosa de las autoridades, que es lo que protegen las garantías constitucionales en comento.

Incluso cabe precisar que con motivo de la publicación del ordenamiento legal controvertido en el Periodo Oficial del Estado, se estuvo en posibilidad de conocer el régimen de transición al que quedaron incorporados los trabajadores en relación a ese artículo transitorio, por ser un medio de difusión de las normas jurídicas.

Tiene aplicación la Jurisprudencia 65/2000, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes,

AVISO

Como se advierte del aviso antes transcrito el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, quedó constituido materialmente el veintinueve de junio de dos mil nueve situación que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el uno de julio siguiente; por tanto, la publicación y contenido de esa información oficial es un hecho notorio para la población de esta entidad federativa, incluyendo precisamente al trabajador finado a partir de la constitución material de dicho organismo contaba con un plazo cierto para elegir la opción del régimen de pensión al que deseaban quedar incorporados.

En razón de lo antes expuesto, se considera infundado el concepto de violación realizado sobre el particular.

En otro apartado, es infundada la amplia exposición de argumentos que la persona quejosa realiza en diversos segmentos de la demanda de amparo, mediante los cuales explica, porque a su consideración, la sala responsable indebidamente aplica por analogía la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DOCUMENTO DENOMINADO "TRANSACCIÓN DE DOCUMENTO DE ELECCIÓN" ES INEFICAZ PARA DEMOSTRAR QUE SE OPTÓ POR EL BONO DE PENSIÓN EN CUENTA INDIVIDUAL.

Hechos: Un asegurado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) demandó la nulidad de la elección del régimen pensionario de cuentas individuales por no haberse acogido a esa opción, acorde con el Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir de 2007. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su nulidad al estimar que con el documento denominado "transacción de documento de elección" no se acreditaba que el actor hubiere hecho dicha elección. Inconforme, la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, argumentando que el documento referido es suficiente para tener por acreditado que el trabajador eligió el régimen de bono de pensión o cuentas individuales en términos del citado reglamento.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el documento denominado "transacción de documento de elección" es ineficaz para acreditar que el trabajador eligió el régimen de bono de pensión en cuenta individual desde la fecha de su elaboración, si no reúne los requisitos exigibles para tal efecto en el artículo 26 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Justificación: Lo anterior, pues aun considerando que con dicho documento se demuestre que la dependencia o entidad para la cual prestaba sus servicios el actor informó al instituto demandado que éste eligió el régimen de bono de pensión en cuenta individual, es ineficaz para acreditar el cumplimiento de los artículos **42 y 44** del reglamento citado, es decir, tanto que la dependencia puso a disposición del instituto la relación electrónica a través de los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Recepción

de Información "SIRI" en los plazos aplicables, como que el instituto entregara la lista de los trabajadores que ejercieron su derecho de opción, con los datos aplicables para tal efecto. Ahora bien, tampoco puede equipararse al documento de elección del régimen pensionario de los trabajadores que debieron poner a su disposición el instituto señalado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la colaboración de las dependencias y entidades, si no contiene los requisitos previstos en el precepto 26 del invocado reglamento, entre otros: i) La dependencia o entidad en la que el trabajador presta sus servicios; ii) La firma autógrafa y huella digital del trabajador; y, iii) La firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que recibió el documento de elección."⁷

Lo cual, a consideración de la persona quejosa es incorrecto, pues lo cierto es que dicha tesis no es aplicable para el caso en estudio ni de manera analógica, de ahí que indebidamente la sala responsable se apoyara en la misma al dictar la sentencia reclamada.

Como se dijo anteriormente, los argumentos en relación a lo anterior, **son infundados**, ello se debe a que este tribunal colegiado estima que al margen de compartir o no lo expuesto por la sala responsable a fin de aplicar la referida jurisprudencia por analogía, e incluso de llegar a la conclusión de que la misma no es aplicable, ello no llevaría a conceder la protección de la justicia constitucional en la forma y términos que pretende la persona quejosa, esto es, a fin de que se le pague el bono de pensión, toda vez que como se mencionó anteriormente, la razón fundamental

⁷ Registro digital: 2026635. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materia(s): Laboral, Administrativa. Tesis: III.1o.A. J/6 A (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, página 6471. Tipo: Jurisprudencia.

En ese sentido, en el caso se estima que no se trata de un tema de retroactividad de la jurisprudencia como lo pretende hacer ver la persona quejosa, pues para ello, era necesario que existiera una jurisprudencia que interpretara un asunto idéntico al plasmado por la persona quejosa en el juicio de origen y que posteriormente surgiera una diversa jurisprudencia que dijera lo contrario en relación a dicho asunto, y que se aplicara a la persona quejosa ésta última, sin embargo, no es así, pues lo cierto es que las jurisprudencias respecto de las cuales aduce la persona quejosa existe aplicación retroactiva, no interpretan de manera directa un asunto como el que nos ocupa, además, como ya se dijo, la misma se aplicó de manera analógica para robustecer las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en la sentencia reclamada.

Por otra parte, en contra de las consideraciones plasmadas por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, la persona quejosa, en la demanda de amparo formula una amplia exposición de argumentos en los que, esencialmente, señala lo siguiente:

El artículo 10 de la Ley de Extranjería establece que las autoridades competentes, en el momento de la entrada en el territorio nacional, deben verificar si el extranjero cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería para la entrada en el territorio nacional. En caso de no cumplir con los requisitos, las autoridades competentes deben denegar la entrada al extranjero y, en su caso, ordenar su expulsión del territorio nacional.

- Asimismo, que indebidamente la sala responsable niega valor probatorio a las demás pruebas aportadas en el juicio de origen.
- Refiere que la autoridad responsable se equivoca en considerar que, para acreditarse que el trabajador migró al sistema de cuentas individuales, ello solo puede ser a través del ofrecimiento como prueba de los escritos o cartas de migración que presentó el trabajador ante el Instituto de Pensiones en el mes de septiembre de dos mil nueve; lo anterior, porque ni en la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, ni en ningún otro ordenamiento se establece esa obligación, esto es, de resguardar durante tanto tiempo los escritos mediante los cuales se comunicó la voluntad de migrar al sistema de cuentas individuales.
- Que la resolución reclamada vulnera el derecho humano a la seguridad social que se pretende ejercer mediante el retiro del bono de pensión de la cuenta individual, y que el pleno de la Suprema Corte de Justicia

e prueba
e no hub
ito o cart
su inter
les, no e
trabajador
ido bono
e equivoc
eno valor
ción al s
presenta
nstantia
ora resul
referido b
apital”, de
s de rece
l a su c
urda, ya
e dicha

- Que el hecho de que no hubiera conservado los acuses de recepción del escrito o cartas de presentación mediante el cual manifestó su intención de migrar al régimen de cuentas individuales, no es motivo suficiente para eliminar el derecho del trabajador a que le acrediten en su cuenta individual el referido bono de pensión.
- Que la autoridad se equivoca en no tomar en cuenta la documental con pleno valor probatorio, con las cuales se acredita la migración al sistema de cuentas individuales, ya que por haber presentado esos escritos, es que el patrón emitió la constancia ***** (4), y refiere que a pesar de ello, ahora resulta que el trabajador no tiene derecho al pago del referido bono de pensión por haber cometido el “pecado capital”, de no conservar por más de una década los acuses de recepción de ese escrito o carta de migración, lo cual a su consideración es un abuso y una exigencia absurda, ya que en la Ley de Pensiones no se establece dicha obligación a los trabajadores.
- Señala que en la sentencia reclamada se hace una interpretación incorrecta de los artículos sexto, séptimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, todos transitorios de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, pues de los mismos no se advierte que solo pueda ser demostrada la migración al sistema de cuentas

- Insiste en que dicha constancia es el medio eficaz para acreditar la migración de facto al sistema de cuentas individuales, pues es emitido por el propio empleador y su fundamento es el artículo transitorio Trigésimo Primero de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, mismo que dispone que el empleador debe

- KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a662063a6633000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

⁸ “Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”



Los preceptos transcritos establecen [el artículo Sexto Transitorio] que los trabajadores que hayan ingresado al servicio público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a662063a6633000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

Bajo el relatado contexto legal, es inconcuso que los trabajadores en transición, entendiéndose como tales aquéllos que hubiesen ingresado al servicio público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta de marzo de dos mil nueve, tienen derecho a optar por el régimen establecido en los artículos transitorios o migrar al sistema previsto en la propia ley; esto es, se trata de un derecho

En el caso, como quedó evidenciado en párrafos anteriores, la autoridad responsable revocó la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1144/2021, del índice de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y reconoció la validez de la resolución impugnada en la cual el actor –aquí persona quejosa- solicitó el retiro de la cuenta individual, que a su consideración se integra con el bono de pensión, las cuotas del trabajador y las aportaciones del empleador, por la razón toral de que dicho trabajador no acreditó haber migrado al régimen de cuenta individual –con lo cual, como se advierte párrafos anteriores, este tribunal colegiado comulga-.

Sin embargo, se estima que si bien el trabajador no tiene derecho a que se le entregue el bono de pensión, sí debe considerarse que tiene derecho a la entrega de las cuotas aportadas por el trabajador y las aportaciones del empleador, a pesar de no haber migrado al sistema de cuentas individuales.

régimen establecido en los artículos transitorios, o bien, migrar al sistema de cuentas individuales, así como el plazo con el que contaron para informar si era su deseo o no migrar a dicho sistema.

Así, el artículo 44 de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, dispone:

“Artículo 44.- Es el derecho de todo trabajador de contar con una cuenta individual, para ello el Instituto establecerá una cuenta individual en favor de los trabajadores sujetos a las prestaciones que consagra esta Ley.” Énfasis añadido.

A su vez, el artículo 3, fracción V, de la citada ley, precisa qué debe entenderse por cuenta individual, al establecer:

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

[...] V. Cuenta Individual: La que se constituye a favor del trabajador, para que se registren las aportaciones, cuotas, rendimientos, y cualquier otra cantidad que tenga derecho a recibir para el pago de su pensión; [...]”. Énfasis añadido.

El propio numeral señala qué debe entenderse por aportaciones y por cuotas, al disponer en sus fracciones III y VI, lo siguiente:

“[...] III. Aportaciones: El monto que deben cubrir al Instituto los empleadores, equivalente a un porcentaje determinado del salario sujeto a cotización;

[...]

VI. Cuotas: El monto que debe cubrir al Instituto el trabajador, equivalente a un porcentaje determinado de su salario sujeto a cotización; [...]. Énfasis añadido.

“Las aportaciones que corresponden a los empleadores por estos trabajadores serán del 15.00% del salario sujeto a cotización.” Énfasis añadido.

Ahora bien, el artículo 20 de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, publicada el treinta de marzo de dos mil nueve, en el citado periódico, dispone:

“Artículo 20.- En caso de que el trabajador no reúna los requisitos de edad o años de cotización, para recibir esta pensión, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición, o bien, contratar con el Instituto, una renta vitalicia sin que tenga derecho a la pensión mínima garantizada.”

“CAPÍTULO II

PENSIÓN POR JUBILACIÓN

Artículo 19.- El monto de la pensión por jubilación será el máximo entre la renta vitalicia resultante de la cuenta individual y la pensión mínima garantizada.

Artículo 20.- En caso de que el trabajador no reúna los requisitos de edad o años de cotización, para recibir esta pensión, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición, o bien, contratar con el Instituto, una renta vitalicia sin que tenga derecho a la pensión mínima garantizada.”

KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY
706a6620636a66330000000000000000ae0:
01/12/28 12:16:53

De ahí que se sostenga, que lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, publicada el treinta de marzo de dos mil nueve, únicamente resulte aplicable a los trabajadores que ingresaron bajo la vigencia del régimen de cuentas individuales y a los trabajadores que migraron al sistema de cuentas individuales.

Ello se corrobora con los comprobantes de pago a nombre del promovente del amparo, allegados por la autoridad demandada, de los cuales se aprecian los

PARENTESCO

22 DEC. 2006

\$1,445.00

RECIBIDO

SEÑOR PASTOR ALVARO P. P. P.

PRESTACIONES DE SERVICIO

to del su
icado por
ber elegic
nces, el a
inaloa, no
e afirmó
a implic
el juicio

La

En efecto, de la demanda de nulidad se advierte que la pretensión del trabajador es obtener tanto el bono de pensión, pero también el pago de aportaciones del empleador y de cuotas del trabajador.

A su vez, el artículo Vigésimo Sexto Transitorio de la mencionada ley, establece:

“Artículo Vigésimo Sexto.- Cuando un trabajador no haya migrado al sistema de cuentas individuales previsto en esta Ley y no tenga derecho a recibir ninguna de las pensiones previstas en la misma, el Instituto le reintegrará el total de sus aportaciones actualizadas con el índice Nacional de Precios al Consumidor durante todo el período, en un plazo no mayor a tres meses posteriores a que haya dejado de prestar sus servicios a cualquier empleador sujeto de esta Ley y de realizar sus aportaciones al Instituto.”
Énfasis añadido.

Esto es, tal dispositivo señala que cuando un trabajador no haya migrado al sistema de cuentas individuales previsto en dicha ley y no tenga derecho a recibir ninguna de las pensiones previstas en la misma, el instituto le reintegrará el total de sus aportaciones.

Y si bien el artículo Vigésimo Sexto Transitorio en
mención, dispone que, en el supuesto ahí establecido
(precisado en el párrafo que antecede), el instituto
reintegrará al trabajador el total de “sus aportaciones”, es
inconcuso que se refiere al saldo total de su cuenta
individual.

En esa tesitura, si la baja del justiciable fue el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ello conlleva a que la

contra el acto que reclamó a la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero de esta ejecutoria, el amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico; y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Presidenta **Sara Singh Urías** y, los Magistrados **Mario Galindo Arizmendi** y **Miguel Ángel Betancourt Vázquez**; que integran el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados, en la inteligencia de que la Magistrada Sara Singh Urías formuló voto concurrente; firmado en unión de la Secretaria Projectista de Tribunal de Circuito licenciada **Karla Aide Noriega Echagaray**, que autoriza y da fe. La presente resolución se terminó de engrosar el día seis de julio de dos mil veintiséis, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 186 y 188 de la Ley de Amparo.



A fin de que el Instituto pueda individualizar y administrar dichas cuotas y aportaciones, los empleadores deberán proporcionar la información adicional de cada trabajador que el Instituto le solicite en la forma y periodicidad que se señale para estos efectos”.

El saldo de la cuenta individual obligatoria es inembargable y no podrá otorgarse como garantía”.

“Artículo 48.- El rendimiento anual que el Instituto pagará por los recursos de la cuenta individual, no podrá ser inferior a la tasa de inflación del mismo periodo más dos puntos porcentuales.

El saldo de la cuenta individual del trabajador que obtenga alguna pensión o cualesquier beneficio de los previstos por esta Ley, continuará actualizándose y generando intereses de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior”.

“Artículo Cuarto.- Los trabajadores que estén prestando servicios a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley quedarán sujetos a lo establecido en los artículos transitorios de este Decreto, que les resulten aplicables”.

“Artículo Sexto. Los trabajadores que hayan ingresado al servicio público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, serán considerados como trabajadores en transición”.

No obstante, coincido con el planteamiento de que, de una interpretación del artículo vigésimo sexto transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el treinta de marzo de dos mil nueve, el actor, aquí persona quejosa, tiene derecho a la devolución de las cuotas que fueron cubiertas por su parte, así como de las aportaciones realizadas por su empleador, ya que, efectivamente, sería ilógico que tuviera derecho a las



Sin que ello, implique reconocer el derecho a una cuenta individual, ya que ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 3º, fracción V, de la Ley del Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en cita, se integra por las aportaciones, cuotas, rendimientos y cualquier otra cantidad que tenga derecho a recibir el trabajador para el pago de su pensión, lo cual, no resulta aplicable para los trabajadores que fueron registrados en el régimen de transición, como acontece en el particular.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL DOCUMENTO	REFERENCIA GENERAL DE LA INFORMACIÓN TESTADA	CLASIFICACIÓN	FUNDAMENTO
(1)	Corresponde a información protegida, por constituir la identificación de las partes y demás datos de esa naturaleza, que aparece dentro de una transcripción.	Confidencial	Artículo 115, fracción I, de la LFTAIP
(2)	Nombre de la persona quejosa	Confidencial	Artículo 115, fracción I, de la LFTAIP
(3)	Número de oficio de la resolución impugnada.	Confidencial	Artículo 115, fracción I, de la LFTAIP
(4)	Número de constancia.	Confidencial	Artículo 115, fracción I, de la LFTAIP
(5)	Cantidad monetaria.	Confidencial	Artículo 115, fracción I, de la LFTAIP

Esta hoja finaliza el texto de las consideraciones de la ejecutoria del **amparo directo 203/2025**, se anexan firmas electrónicas. Martín.

PJF - Versión Pública



Archivo Firmado:

159658398_1378000038142918008.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	KARLA AIDE NORIEGA ECHAGARAY	Validez:	BIEN	Vigente	
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.05	Revocación:	Bien	No revocado	
Fecha (UTC/ CDMX)	06/07/26 19:56:39 - 06/07/26 13:56:39	Status:	Bien	Valida	
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	70 66 83 4b ec 68 6e d0 81 25 3e b8 3a 45 58 9a 63 73 77 23 d9 0a 9d 3f 01 43 2f 94 5b b3 e3 e9 86 98 ba 8c f9 3f e4 44 a7 d8 0a ec 55 2d af 58 07 94 f1 e3 11 13 43 44 50 5d fc 7b 5c 9d 5d db 26 13 2c 50 8c 34 67 d5 9f 85 8a f8 e0 91 d9 3d 25 be 94 39 0f 38 de 74 67 6d 8a 47 76 6f 10 39 8c 87 eb 8e 4d 6b ac e0 b6 d7 9a be 89 d1 1d 15 2b a4 11 2d fc b7 68 2d 53 fa 2d 70 61 56 62 08 db 7a 47 0c 1a a4 15 ce fa da 75 73 05 4a c9 52 88 22 13 02 ca f8 21 64 81 20 5b ea b9 82 be 64 1d 39 76 63 bb cc 67 b3 cf d6 4e e5 a6 be a9 c1 0b 2b 26 d6 5e 63 ba 0d 19 04 c2 61 3f 60 6e 7f e1 0e 5a b8 94 cd 50 e9 6a f2 5c c8 a1 97 7b 71 58 0a e8 ac 2d b5 22 2d 07 3a 1e e0 6c 7d bd 7e e1 29 19 1d b2 48 07 7b 0c 2e 38 e8 9f 25 36 be 48 04 88 5c 3a ac a9 50 cf a2 63 eb 83 3e d4 0b 6a 33 d1 34 e7 e5 f9 69 9b 5d b4 d9 25 f6 1d fe 41 a5 38 f9 c0 a4 fc ca d4 a6 bb b3 20 48 62 cc 8f 8f 92 31 c9 ee 61 2f d2 97 64 a6 d8 c7 60 5d db b6 e4 91 75 71 e1 64 6a f8 c3 d0 a5 f7 21 de 53 ea 48 b4 0d 3b 8a c3 a9 a0 e3 06 71 20 d4 58 8d df 35 2e 98 5e 19 50 fb c3 d9 9b f7 5d 6e 40 ad f4 c7 e9 d4 2b 02 74 0a 59 70 84 89 01 f6 f5 e0 ac a5 71 84 7f 84 4e ab d3 12 56 fa 1a 84 91				
OCSF					
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/07/26 19:56:39 - 06/07/26 13:56:39				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.ae.05				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/07/26 19:56:40 - 06/07/26 13:56:40				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	177474335				
Datos estampillados:	YLZJJmOEs/HYn+4Pe+qjVslzHI=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MARIO GALINDO ARIZMENDI	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.4d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:20:21 - 06/07/26 14:20:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6d 6a 91 30 93 c8 9e 87 df f8 b8 ba db da 3a d1 de 29 37 58 92 fd 89 60 80 2b 30 8a cd 2b b4 16 70 b1 32 6f 8f 27 96 e5 1f 3b 3f bc 2c 72 e7 19 61 fe b2 47 92 89 74 4b dd de ec a5 af 35 bf 68 1e b2 28 a4 d9 23 33 c7 b8 3b 19 bd e1 6d cb fd a4 1c 02 89 18 49 cd d3 dd b1 3d 1f fb 9f c5 e8 a9 43 b2 e0 b4 db 07 d1 b7 9d d3 a4 7d e4 1c 86 46 d8 04 e9 14 b2 71 78 3e fb cd c7 69 5f 1f a0 f3 47 d4 ef f4 8b 0b 78 f9 ca 70 dd d0 0b da 3c 4f 84 c6 79 90 fd 6f a8 8f 10 63 a3 fa 57 34 79 80 d3 d0 58 48 84 bc d1 17 05 c1 5f eb 59 c3 d7 e8 50 0e 97 b5 be e3 bf 1e 9d be 05 7e 13 9b 63 3a 0e d4 d8 1e 1f d1 c8 5d 2b 47 89 3d ec 02 c5 c3 81 ce ab 1a 32 a2 d8 11 d4 9f 1a 5f 11 9c 56 2e a6 e3 9b d8 04 67 fd 36 dd 0a 30 bf a6 86 d5 c4 64 01 c0 bd a2 01 38 a7 02 91 e1 96 06 a9 d2 1f d8 8c c3 9e 33 4b e9 c9 8b 7e 99 c1 f6 72 9f f0 29 d0 4e 7d 96 9e d9 be a2 81 47 aa 9b 92 f0 13 67 1b 05 ca 2d 3b a5 0d e9 3f 53 e3 0a b8 aa 63 9d a1 e8 a8 7c 71 f5 91 94 84 ea f9 4a ed 91 07 7e dc 9e 06 21 b7 f0 90 78 2b 26 d6 6a 64 fa fc 90 69 16 ed 57 ee ee 02 75 63 43 05 85 57 e9 6a 9b 30 2e c2 87 c8 ae 3e 2a a9 e3 14 10 16 a2 57 af e9 fb d8 36 09 a8 e4 e7 88 ef 7e ec 95 22			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:20:21 - 06/07/26 14:20:21			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.4d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:20:21 - 06/07/26 14:20:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177502814			
Datos estampillados:	IveZ5f5XFymkvbxerKlqwssNZg=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MIGUEL ANGEL BETANCOURT VAZQUEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.69.65	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:21:49 - 06/07/26 14:21:49	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	69 87 46 f7 19 61 a6 1e 37 03 60 98 8e 1e b5 55 ec f1 68 e1 ae ab 1f 34 91 3a 1f 60 15 c7 6a 01 75 91 fe bb be ca d2 a5 72 7a 10 e4 a4 f4 79 84 33 98 fc 1b ba 95 42 72 e4 30 52 cb 54 e6 18 ac f5 8a a1 c1 52 9a 1a 94 2c bc 4a a0 2c 93 d3 30 96 b2 49 da 05 22 9f 81 dc 81 79 fd bc 16 88 95 9c ae 19 ca 91 05 10 7f 89 28 81 6d 8e bd 77 dd 9a 61 69 4f 44 a0 8b e1 f4 7c aa 58 05 63 73 49 9a 75 86 d1 3e b2 c9 2c 68 c3 25 eb 81 eb f0 93 74 11 20 04 21 17 23 af 1e a8 dd bc 9e 6e 6b e6 69 bb a0 9f 9b 2d 23 18 37 ff 47 b0 05 72 a2 c8 c4 94 dd dd 98 b6 ba 2a 3f 29 4b fd bc e4 b1 6d a2 36 9f 11 3b 2b 41 d6 0b fc d4 f6 ae c0 2b c2 4d 04 82 9e ce 63 b6 2b 63 92 4f 8b 73 10 7c 49 ad f3 ab 4a 45 32 1b ab 3f c8 9c 1a 93 9e 66 0d af b9 65 66 01 53 9e 69 07 11 2d 7e c5 7c f0 20 81 fd 37 58 48 04 af 05 d0 1f 82 eb 8a a0 86 e8 79 e7 4d 53 8d 07 1f 2a 04 5e b0 44 4a 14 c4 46 65 fb a3 17 a7 24 07 b8 1b 90 a6 fe 4b 11 3d c2 10 94 69 93 ab fd f3 20 ca 61 4c 11 b6 49 15 9e 4c e4 4f 06 ac a5 05 cc 89 78 5f 7b 38 5d 86 6c da 46 f0 79 0a ea 06 a8 91 0b e8 17 e7 97 b2 0a 28 8c 1d 7d 93 bf 55 64 d0 47 20 ff 94 1a 74 92 80 6a ac cc 69 b2 e4 6c bf 81 40 44 66 5a 3a 12			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:21:49 - 06/07/26 14:21:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.69.65			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:21:50 - 06/07/26 14:21:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177504827			
Datos estampillados:	86FMbcXRQJg6lWpaTd/QDiS78TY=			



FIRMANTE					
Nombre:	SARA SINGH URIAS	Validez:	BIEN	Vigente	
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.61.90	Revocación:	Bien	No revocado	
Fecha (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:23:21 - 06/07/26 14:23:21	Status:	Bien	Valida	
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	a2 fc 77 12 1e c9 09 48 1d b4 7b 9a 1f e4 7e e4 d0 70 70 53 a8 0a 6e 95 13 19 ba 43 7a 61 14 00 d6 65 5e a6 49 03 ad 71 b8 6c d7 04 38 0a 31 43 7d a5 ff fc 11 f1 08 c9 19 54 a5 cc 64 6b c2 fd 0b 55 b6 9e 3b f5 d4 fa 29 c3 c9 68 56 89 17 0d ee 81 b7 49 ca 1e 80 f5 c1 e0 d3 4d 1a bc ee 73 c6 14 56 6a a5 9d 96 71 02 06 78 f5 e6 07 39 8a 53 e1 89 d6 ca 66 ac 1a 66 54 78 07 cd 20 c2 84 3e 57 48 2f ab 90 75 f6 25 6b 0b 0c 0f 8f c3 26 d2 49 d6 7e 8a 30 01 40 38 39 07 b2 85 91 89 60 71 2d a2 23 fc 50 a8 55 a8 03 f2 ff 30 ef 5c 65 ff 6d bd 27 6f 9e ec 69 ec b4 f3 17 f0 5d 33 17 e1 31 c4 c1 92 7d 18 84 d5 a0 53 7d b6 42 14 cd 7c a5 c2 11 1e 79 e5 50 b2 47 49 6c cf c5 56 ec 28 e7 10 7a 6b bd 81 85 f7 2c d5 89 95 8c 23 15 a0 5a a5 9c 9c 78 da 36 1d 94 d2 87 c8 28 42 a4 99 5d be 5c a5 03 b9 67 16 88 a0 64 24 f9 d5 a8 fb 58 15 32 2d ed a8 1d 0b e2 d8 18 98 ea d7 0a 3e 74 44 8d 33 69 58 40 e8 a8 a2 1a 2f e4 bb 32 d8 d7 db 75 0f 6a 1d 89 05 6e 98 32 7a ad ad 36 32 fd 42 9d df 26 51 29 fa 26 b2 55 45 52 77 da a7 7d 28 8c fa fe 8a c4 8e 81 f4 6a 55 ae 1a bd ee 5c 48 fe 50 a2 e7 db b5 82 52 75 c1 92 35 9b 7a 42 81 0c c5 33 a6 ec ad 20 c4 36 c8 5c e0 73				
OCSP					
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:23:21 - 06/07/26 14:23:21				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.61.90				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/07/26 20:23:22 - 06/07/26 14:23:22				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	177507111				
Datos estampillados:	SlyzYtJdL32ms8KKacGnVEbluWk=				

El seis de julio de dos mil veintiseis, el licenciado Kevin Hernández Conde, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de Por disposición de la Ley. Conste.